Proyecto Hoenig

52

Santiago, Enero de 1975

Estimado René:

He decidido escribir estas líneas movido por un imperativo moral y por una profunda angustia. No tengo título personal alguno para hacerlo, pero percibo, de alguna manera, proyectada en el tiempo, la responsabilidad del cargo de Rector de la Universidad de Chile que me tocó desempeñar durante cuatro años, y en momentos particularmente difíciles. Hoy, transcurrido ya más de un año desde la fecha en que por circunstancias de todos conocidas abandoné esa posición, la invoco porque siento la obligación y la necesidad de intentar una modesta contribución a la tarea de definir el rumbo futuro de Chile lo que, por cierto, es deber ineludible de todos los hijos de esta tierra.

Creo, también, que ya es suficiente el tiempo que ha pasado desde que el 11 de Septiembre de 1973 un golpe de estado o guerra civil de pocas horas puso término dramático a un capítulo de la historia de nuestro país. Se ha cumplido la espera prudente que aconseja la razón y parece indispensable reabrir el diálogo entre los chilenos con serenidad y espíritu constructivo, iniciando un amplio debate sobre la vocación y el destino de nuestra patria. Me parece por ello oportuno que se escuche una voz, en gran medida dicidente de las posiciones de quienes han tenido en este tiempo acceso a los medios de comunicación, y que posee al menos la autoridad que le confiere el que nadie pueda acusarlo de ser agente, simpatizante o instrumento "tonto útil" de los "villanos de turno".

Nadie más indicado que el Director de "El Mercurio" ardiente defensor de la libertad de expresión para tomar la iniciativa de promover en forma de seminario, un amplio debate a nivel académico en torno a cuestiones como las que se plantean en esta carta, la que queda a vuestra disposición para tal efecto. En todo caso estoy haciendo llegar copias de ella a algunos amigos, los que naturalmente tienen amplia libertad para disponer de ella en la forma que les parezca más conveniente.

Quisiera iniciar este análisis dejando establecido cuál es mi juicio respecto del pasado. Estoy convencido que en el Gobierno de la Unidad Popular prevalcieron desde el comienzo del régimen y de manera cada vez más decisiva quienes estimaban que sólo la "dictadura del proletariado" permitiría construir la nueva sociedad imaginada por sus ideólogos. El dogma simplista e irresponsable condujo fatalmente a la pretensión de conquistar el Poder total a cualquier precio.

El caos económico y social, la destrucción de las bases de la convivencia democrática tan cara a los chilenos, la corrupción moral provocada por el mercado negro y otros hechos anexos, y la violencia política creciente fueron, en definitiva, la consecuencia de la tentativa de imponer el proyecto histórico de los teóricos revolucionarios en contra de la voluntad de la mayoría, procuriéndose la inevitable confrontación del Gobierno con quienes rechazaban su modelo de sociedad.

Creo, por tanto, firmemente, que recae en el Gobierno de la Unidad Popular, expresión concreta de las tendencias predominantes en su seno, la responsabilidad principal del desastre.

Estimo, sin embargo, que debemos ser honestos y reconocer con humildad que a todos corresponde una cuota de culpa en lo acontecido. A unos porque no supieron encontrar a tiempo mecanismos democráticos suficientemente legítimos y efectivos para resolver los conflictos

que ahondaban día a día la división entre los chilenos. A otros porque no tuvieron oportunamente la unidad o la decisión requeridas para actuar, legalmente pero sin contemplaciones, con el objeto de impedir la formación de organizaciones paramilitares y la acumulación ilegal de armas, sin lo cual no habría sido posible la violencia sistemática y creciente ni la amenaza de guerra civil. Es justo reconocer, también, que el afán de preservar la institucionalidad llevó a unos y otros a mantener abierto el diálogo y/o la colaboración desde cargos gubernativos muy difíciles, conducta que, sin duda, terminará por obtener el merecido reconocimiento de la historia.

La tarea de esta hora es construir el futuro que pertenece y tiene que incluir por igual a los 10 millones de chilenos, y no es el privilegio o "destino histórico" de algún sector particularmente ilustrado, patriota o iluminado. Indiscutiblemente debe ser esta una lección principal de la experiencia reciente. Pero, por esta misma razón no podemos simplemente enfrentar el pasado con el ademán acusador de quien señala errores y debilidades, sin reconocer y recoger también los valiosos aportes a la elevación de los niveles de vida y la construcción de una sociedad progresivamente más abierta, menos injusta y más democrática, fruto del esfuerzo acumulado de los sucesivos gobiernos que tuvo el país, aunque la magnitud y trascendencia relativas de la contribución de cada uno de ellos sea obviamente materia de apreciación individual. Los chilenos de hoy somos el producto y los herederos de nuestra historia, la sentimos íntimamente y la juzgamos de manera diversa. Es por eso que estimo equivocado, injusto y negativo para las posibilidades de una efectiva convivencia social la tendencia a desestimar el pasado y calificar, en especial, las décadas más recientes como épocas de decadencia y descomposición. Los diversos regímenes que nos gobernaron tuvieron, sin duda, muchas debilidades y limitaciones pero lograron también éxitos indiscutibles en la transformación y desarrollo del país. Es posible que, por

desgracia, los avances en materia de desarrollo y justicia social se fueron logrando a expensas de una intensificación de los conflictos sociales, de una reducción en la tasa de crecimiento económico y, en general, de una menor "eficiencia de la sociedad".

En este sentido, cualquier análisis sereno tendría que convenir que similar inspiración impulsaba a la Unidad Popular cuya responsabilidad no deriva de algún tipo de maldad intrínseca de sus miembros sino de su persistencia contumaz en un modelo utópico de corte meseánico cuyo fracaso no fueron capaces de percibir o reconocer. Por lo demás, no todos los adherentes de la Unidad Popular eran marxistas, y sólo una parte de esos marxistas - por desgracia la que determinó la orientación del Gobierno - creía en la dictadura del proletariado. Muchos grupos de izquierda tanto en nuestro país como en el resto del mundo responden a ideologías social-demócratas, de socialismo democrático o de diversas formas de avanzada cristiana que claramente no son totalitarias.

Todas estas reflexiones no carecen de importancia si se considera que cerca de un tercio de los chilenos deben aún haber sido adherentes del Gobierno de la Unidad Popular en el momento de su caída, en tanto que otro porcentaje similar se declaraba decidido simpatizante del régimen demócratacristiano que precedió a aquel, y todos ellos forman parte de la comunidad de 10 millones de chilenos.

Mayor trascendencia adquiere aún el examen desapasionado de estos problemas si se considera que la empresa de reconstruir la democracia implica elegir un camino para la reconciliación nacional, y determinar los principios, métodos y mecanismos que han de guiar la acción pública y la participación ciudadana en la magna tarea de dejar como legado a las nuevas generaciones una sociedad a la vez estable, progresista y libertaria.

De ahí que sienta angustia ante hechos, criterios y actitudes que a mi parecer hacen daño a la reconciliación nacional. Estoy convencido que es justamente a los vencedores en una contienda a quienes cabe mostrar la grandeza y la visión que contribuya a cerrar las heridas y echar las bases de una nueva convivencia. Es por eso, también, que no puedo comprender el espíritu de revancha de ciertos civiles que no sólo se ensañan en los caídos sino se empeñan en dividir a los chilenos entre "buenos" y "malos" prolongando así de hecho uno de los aspectos más negativos del dogmatismo de la Unidad Popular. Hubiera esperado más bien que quienes (que) tanto lucharon por defender la democracia como se afirma en un reciente documento público, mostraran igual voluntad y compromiso para ayudar a su plena reconstrucción.

El problema del mejor camino para lograr la reconciliación y de la forma en que se ha de proceder para reconstruir la democracia plantea una primera interrogante muy fundamental. ¿De qué manera puede entenderse el mandato o misión del actual gobierno militar? Es indiscutible que después del 11 de Septiembre la adhesión a la Junta de Gobierno Militar se concentraba en los conceptos de orden y autoridad, el restablecimiento de condiciones de seguridad física para el ciudadano común, la recuperación de la disciplina social y el funcionamiento normal del sistema productivo y de distribución. Estimo que el apoyo al gobierno surgido del golpe militar era ampliamente mayoritario en los diversos grupos sociales del país, si bien se advertía claramente un mayor grado relativo de respaldo previo en la clase media, las mujeres en general, los sectores profesionales y gremiales, los grupos empresariales y el comercio. Tuvo, pues, el actual régimen una indiscutible base de sustentación inicial, lo que para efectos prácticos permite no detenerse en la cuestión mucho más discutible de su legitimidad originaria formal.

El problema de la legitimidad se torna, sin embargo, progresivamente más importante a medida que pasa el tiempo, que se cumplen las tareas enunciadas como razón del

respaldo inicial recibido y que el ejercicio pleno de las funciones de Gobierno implica tomar decisiones de vastos alcances en las más diversas áreas de la vida nacional.

Por una parte, en efecto, los valores que concitan el apoyo ya señalado pierden su importancia relativa, pues ninguna sociedad moderna cuenta entre sus objetivos el orden y la autoridad como fines en sí mismos. Ambas cosas son necesarias pero, en definitiva, constituyen meros requisitos para el cumplimiento de las metas sustantivas del desarrollo económico, social y cultural.

La seguridad física y la disciplina social son, asimismo, condiciones básicas de la convivencia nacional y se dan por descontadas en una situación normal. Dicho de otra manera, la justificación o mandato inicial del régimen que, a mi juicio con razón, invocan sus partidarios, tiende fatalmente a agotarse. En tales condiciones la legitimidad en sentido dinámico empieza a depender del juicio que a la ciudadanía merecen los actos del gobierno, y de la existencia o entrega de mandatos adicionales a los que pudo tener en su origen.

Ahora bien, no hay ningún antecedente, ni manifestación de voluntad popular que permita sostener que existen mandatos de alcance mayor que los puntos que se han señalado en los párrafos anteriores y que dicen relación con la normalización del país. Así se deduce del examen de cualquiera de los documentos emanados con anterioridad al 11 de Septiembre de sectores u organismos representativos de la vida nacional. Ninguna declaración o acuerdo del Parlamento, Corte Suprema, gremios, Colegios Profesionales, Universidades, Federaciones Estudiantiles, etc., contiene concepto alguno que pueda interpretarse como el deseo o la voluntad de entregar a quienes eventualmente pudieran reemplazar al Gobierno de la Unidad Popular, el mandato de construir un "nuevo Chile", y de determinar por decisión unilateral de la autoridad el tipo de régimen

político, el modelo de funcionamiento de la economía o los valores y orientación inspiradoras de la educación, para mencionar sólo algunas materias de mayor trascendencia que requieren decisión. Así se deduce también de las declaraciones de la Junta Militar. De ahí que causen inquietud expresiones posteriores que apuntan hacia una concepción mucho más ambiciosa de su misión, y especialmente los pronunciamientos sistemáticos que en tal sentido han estado formulando sectores civiles que parecen confiar que en tales condiciones tendrán mayor capacidad para influir de manera preponderante en las decisiones más fundamentales.

Lo que importa, en definitiva, es señalar que el Gobierno sólo puede asumir la responsabilidad de determinar el futuro en aspectos esenciales de la organización y funcionamiento de la sociedad, a costa de una pérdida progresiva de legitimidad cualquiera que haya sido su origen y nivel inicial. Sólo la amplia discusión ciudadana y el establecimiento oportuno de sistemas de consulta democrática pueden atenuar o evitar el fenómeno señalado, lo que tratándose de un gobierno que ejercen institucionalmente las Fuerzas Armadas, implica el peligro de que, a la larga, afecte negativamente la seguridad nacional, razón de ser principal de las propias Fuerzas Armadas, además de dificultar su necesaria participación orgánica en el desarrollo futuro del país.

Dicho de otra manera, el actual Gobierno debe, por esencia, ser considerado como un régimen de transición. Así lo exige la reconciliación, y, por consiguiente la paz entre los chilenos. Así queda determinado por el evidente derecho que tienen todos ellos a participar efectivamente en el diseño de nuestro estilo de desarrollo y de las normas de nuestra convivencia futura. No es esta una tarea que se puede cumplir con un mínimo de legitimidad sólo por unas pocas comisiones designadas por designación exclusiva de la autoridad gobernante, ni puede realizarse con ponderación y eficiencia si en ella sólo participan, influyen o son consultados unos pocos ciudadanos, por muy ilustrados o patriotas que sean.

Estas consideraciones conducen a concluir que es ya necesario ir perfilando las sucesivas etapas que se tendrán que cumplir hasta lograr el pleno retorno a una institucionalidad normal y permanente.

Así por ejemplo, aunque nadie puede pretender en forma realista que se celebren elecciones en los próximos 12 meses, no es menos cierto que la argumentación anterior conduce a concluir que la confección de un nuevo registro electoral que no presenta dificultades técnicas insalvables, es una tarea que reviste una urgencia y significación mucho mayor que la que hasta la fecha parece atribuirle la Comisión de Reforma Constitucional creada por la Junta de Gobierno.

La definición del Chile futuro requiere, pues, un debate que permita una confrontación de ideas en base a concepciones coherentes y realistas de la sociedad. Así, por ejemplo, creo que uno de los problemas más fundamentales es la búsqueda de mecanismos adecuados de canalización y resolución de los conflictos sociales, de modo que la legitimidad indiscutible de tales instrumentos permita imponer el posterior acatamiento a las decisiones que se tomen en virtud de las normas existentes.

Lo anterior implica reconocer la inevitable existencia de conflictos en una sociedad que, como todas, registra desigualdades significativas, intereses contrapuestos y limitación de medios para conseguir fines múltiples.

Esta no es una observación baladí por cuanto en estos meses se ha ido perfilando a través de múltiples intervenciones y escritos de diversas personas, el concepto de la armonía de intereses o bien común como una realidad objetiva que a cada problema permite darle una respuesta técnicamente correcta. Es esta una visión de la sociedad tan utópica como la de la "sociedad sin clases" que emergerá después de la "dictadura del proletariado". En este último esquema la dictadura de una clase suprime a los restantes, con lo que

desaparecen los conflictos sociales y el Gobierno se reduce a una mera "administración de las cosas". La teoría de la armonía de intereses, por su parte, declara inexistente los conflictos sociales. Debilidades humanas como el egoísmo y la ambición son superadas por el patriotismo, y la objetividad y la eficiencia de la técnica se encarga de la "administración de las cosas" y asegura el bien común,

Naturalmente, esta concepción no constituye ninguna novedad. Si se pudiera modificar la naturaleza humana y aparecieran sobre el planeta el hombre perfecto u "hombre nuevo" como lo denominaba por su parte, la Unidad Popular, la solución de problemas como el de la distribución de los frutos, la reducción de las desigualdades sociales y otros, sería, sin duda, más fácil, aunque todavía quedarían por resolver cuestiones como la de los juicios de valor más adecuados para medir el "óptimo social",

En suma, reconocer la existencia de conflictos sociales implica simplemente aceptar la realidad y no implica en modo alguno aceptar la teoría de la "lucha de clases" en una formulación dogmática y absoluta. Crear en la armonía de intereses, no es sino una peligrosa ilusión que encubre los conflictos reales que se resuelven de hecho de acuerdo a los valores, criterios y ^{convenciones} ~~convenciones~~ de quienes concentran en sus manos la mayor cuota de autoridad y poder.

La argumentación anterior conduce a señalar la necesidad de restablecer, en primer término, la libertad de expresión y en sentido más general, la plena libertad intelectual, que como es notorio ha estado sujeta a importantes restricciones tanto en las Universidades como en los diversos tipos de publicaciones. Se podría, de este modo, dar un importante paso hacia la libertad política, entendida en el sentido real y noble del término, tan cuestionado por los acontecimientos de los últimos años y por una intensa campaña de desprestigio que algunos sectores han venido desarrollando a partir del 11 de Septiembre. De paso, no está demás señalar, que, en verdad, hay un sector de opinión claramente ideológico que, al amparo de diversos disfraces como nacionalismo, gremialismo y otros,

realiza una de las más activas campañas políticas y proselitistas que se hayan conocido en Chile. Sin duda tienen derecho a hacerlo, pero a lo que no tienen derecho es al goce de una situación de "monopolio político". Por lo demás, por definición, la política no desaparece ni está jamás en receso. Políticas hacen siempre los gobernantes por el mero hecho de gobernar, y políticos son los juicios que emiten quienes se pronuncian en cualquier sentido en relación a las cuestiones diarias del quehacer público. El receso político es en este sentido un mito que termina por entregar la exclusividad de la actividad política a quienes detentan posiciones de autoridad y/o conservan acceso a los medios de comunicación.

Lo más grave de esta situación radica en el hecho de que algunos de los planteamientos ideológicos que han sido expresados públicamente en meses recientes por civiles pretendidamente a-políticos son claramente antidemocráticos.

En relación con esta materia puede afirmarse de modo más general que se conocen al menos dos tipos de agrupaciones que son contrarias a la democracia y que corresponden, por una parte a marxistas que sustentan la tesis de la dictadura del proletariado y por otra a quienes se definen como partidarios del nacionalismo fascista que se expresa en regímenes totalitarios de variadas características. Por último, en el plano de los individuos aislados, es técnicamente tan totalitario como los grupos antes señalados aquel fervoroso patriota que en un periódico latinoamericano declaraba que era su deseo que la dictadura militar de su país durara cien años.

Es por eso que no puedo mirar sino con cierta preocupación el trabajo de la Comisión de Reforma Constitucional que en reciente entrevista de prensa manifestó "que la nueva carta establecerá que aquellos partidos que por doctrina o por la conducta de sus adherentes sean opuestas al régimen o a los principios fundamentales del Estado de Derecho serán contrarios a la Constitución y a la Ley". "En consecuencia los partidos marxistas estarán al margen de la Constitución y de la Ley".

Resulta evidente que el tránsito desde la situación actual a otra en que se acepte el principio general de pleno ejercicio de sus derechos políticos por parte de todos los ciudadanos por igual, sin que existan grupos o sectores "expulsados" del sistema requiere de precondiciones adecuadas y será materia de una acción paulatina que considere el grado de consenso o conflicto subyacente en la sociedad chilena, el progreso que se pueda ir logrando en la reconciliación de los chilenos, y la forma en que estos fenómenos afectan en definitiva a la seguridad nacional. Sin embargo, es claro que nada es más negativo para esta última categoría que, con razón es estimada por las Fuerzas Armadas como la piedra angular de su gestión, que la persistencia de condiciones que impidan o retrasen la conciliación.

Es en virtud de las consideraciones anteriores que me parece un tanto desaprensiva la formulación tan simple y categórica de la Comisión de Reforma Constitucional.

En efecto, ¿Sólo los marxistas son contrarios a la democracia? (pregunta que ya he respondido negativamente); ¿todos los partidos marxistas son "opuestos al régimen democrático"? ¿cómo se identifica realmente un partido democrático? ¿quién se puede arrogar la facultad de juzgar a priori intenciones o descalificar con inevitable valoración subjetiva las declaraciones de principios o estatutos programáticos de diferentes grupos organizados?.

En rigor es imposible identificar en la forma que se sugiere a los partidos antidemocráticos a menos que se opte por el simplismo de dejar fuera de la Ley al Partido Comunista, el que en tal caso reaparecería con otros líderes, y diferente denominación. El esfuerzo de detectar a los comunistas puede, entonces, conducir a las peores formas de "maccartismo" persecutorio en contra de cualquier partido que parezca tener algún tipo de inspiración izquierdista. Estas observaciones permiten concluir que es grande el peligro de arbitrariedad en la interpretación y aplicación de normas de exclusión. No será mejor acudir al principio de exclusión por sus comportamientos...

es preferible buscar mecanismos más eficientes para resolver con oportunidad los conflictos sociales y establecer sistemas eficaces para castigar las conductas antidemocráticas concretas? El objetivo prioritario en este sentido parece ser el de combatir con el máximo de energía cualquier brote de violencia política del tipo que en Chile han practicado el MIR o la VOP y que en Argentina se está manifestando por vía de los grupos de extrema izquierda y extrema derecha. La legislación restrictiva en cuanto a participación política no tiene en estos casos eficiencia alguna, dado que organizaciones como el MIR se auto proclaman al margen de la ley y del orden democrático.

En suma, creo que estas reflexiones refuerzan empíricamente un principio que ha probado su validez en diversas épocas y lugares, cual es que una ideología no se destruye suprimiéndola por decreto o manteniéndola indefinidamente en la clandestinidad, sino combatiéndola con concepciones más convincentes que sean respaldadas por una acción social verdaderamente eficaz.

Aunque reconozco - lo reitero- que una solución definitiva y estable requiere de una prudente evolución a partir de la situación actual, pues cualquier retorno brusco inmediato a una institucionalidad democrática conlleva al riesgo de un fracaso que podría tener fatales consecuencias, no es menos cierto que me pronuncio categóricamente por la democracia plena como régimen futuro, pues estoy convencido que cualquiera otra alternativa llevaría en sí el germen de su propia destrucción. Me pregunto por ello ¿de qué manera, con participación de quiénes, a través de qué etapas y dentro de qué rango de tiempo va a resolver Chile cuestiones tan fundamentales?.

Por fin, contribuye a mi inquietud el hecho de que en el caso concreto de nuestra realidad presente quienes con mayor énfasis e insistencia hacen escuchar su voz en el terreno de los conceptos básicos que deben inspirar el futuro régimen político, tienen la particularidad de compartir una ideología

Con similar preocupación me pregunto qué grado de consenso hay respecto de la implantación de la llamada economía social de mercado, o de cualquiera otra concepción del sistema económico chileno. Es este también, un problema de fondo, por cuanto las decisiones que, inevitablemente se están tomando van mucho más allá del control de la inflación o de la normalización del aparato productivo, tan desquiciado por la gestión de la Unidad Popular, pues implica un "modelo económico" de largo plazo clara y explícitamente definido. Reconozco que la situación económica con que se encontraron las actuales autoridades era de la más extrema gravedad y que las opiniones iniciales existentes para hacer frente al desastre eran muy limitadas, por lo cual no creo prudente aventurar ningún tipo de análisis crítico respecto de las primeras medidas de saneamiento que se tomaron en la emergencia.

Sin embargo, al cabo de quince meses de gestión económica surge ya nítidamente el camino elegido como estrategia del desarrollo futuro. La iniciativa privada nacional y la inversión extranjera, funcionando en condiciones competitivas de mercado deben generar el impulso dinámico que permita elevar la tasa de crecimiento del país. Paralelamente se piensa proceder, dentro de ciertos límites, a una suerte de "desguase" del Estado, reduciendo sus actividades directamente productivas y de promoción y, en general la intervención estatal. Las leyes de mercado, conducirán a una selección natural de los empresarios más capaces cuya acción innovadora generará el aumento deseado de la producción.

Al respecto, surgen algunas interrogantes de fondo. ¿Cabe realmente suponer que el inversionista extranjero podrá cumplir el papel que se le asigna, cuando de declaraciones recientes del propio Gerente General de Corfo se desprende que tales inversiones tardan de 5 a 10 años en madurar y que la nómina de inversiones potenciales en actual estudio por él enunciada, no difiere sustancialmente de los proyectos que hace años se vienen señalando como inversiones inminentes o probables? ¿Puede el país esperar un plazo tan largo antes de intentar un esfuerzo serio de despegue económico? ¿Es Chile realmente un mercado suficientemente atrayente para el inversionista foráneo

o a qué precio puede dársele esa categoría? Opino que una política adecuada en esta materia, más que un trato indiscriminadamente favorable debiera empezar por identificar o negociar en forma directa, bajo la conducción del Estado, los proyectos de inversión de importancia estratégica para el desarrollo nacional que por su dimensión y características envuelven un aporte en capital, tecnología, mercado y/o capacidad de gestión a los que el país no pudiera tener acceso por otras vías. En lo que al resto de la inversión extranjera se refiere su conveniencia para el país depende de su contribución efectiva en uno o más de los rubros recién señalados, y de las otras opciones que en la materia puedan existir,

De manera similar, es probable que -dentro de un supuesto de comportamiento económico racional- las empresas nacionales puedan cambiar dentro de plazos y en escala adecuada su habitual preferencia por las operaciones financieras y las inversiones de corto plazo y especulativas, en circunstancias de que la tasa de inflación es aún superior al 300% y que difícilmente llegará a una situación de estabilidad razonable en un plazo inferior a 3 años? ¿Significa esto también que el modelo supone que deberemos esperar varios años antes del inicio de una fase de crecimiento económico sostenido?

Dados estos antecedentes ¿no resulta necesario considerar también al Estado como agente dinámico generador de expansión económica? Creo que necesariamente ha de ser así, entendiendo que no debe confundirse la política promotora del Estado que caracteriza a la mayoría de las economías mixtas modernas con el centralismo estatista que todo lo ahoga. Criterio similar se sigue sosteniendo, por ejemplo, en Brasil donde la empresa privada y la empresa pública comparten y se dividen responsabilidades en este campo.

Por otra parte, estoy convencido que por sí sola la igualdad formal ante la Ley, el mercado o las oportunidades educativas, tienen como resultante sustantiva una desigualdad cada vez mayor. El modelo de la economía social de mercado en la forma

vieron las primeras medidas de emergencia tomadas por el actual Gobierno) tanto por el desigual poder de negociación entre patrones y asalariados, como porque en tales condiciones, y este es un supuesto inherente al modelo, el ahorro se concentra en manos de las empresas privadas. De este modo se acrecienta el mayor ingreso relativo futuro de los empresarios industriales, comerciales y financieros, y de algunos grupos profesionales. Sin ánimo de hacer demagogia, un Estado neutral es en los hechos un árbitro que favorece a los "ricos" y perjudica a los "pobres", por la simple razón de que ese es el resultado del libre juego de las fuerzas económicas oligopólicas de la producción y de las finanzas. No basta decir que el Estado ejercerá una acción correctiva. De hecho es su obligación conducir el proceso de desarrollo por lo que no puede renunciar a los instrumentos que le otorgan la capacidad necesaria para ejercer esas funciones.

Se argumenta con razón que no hay estabilidad democrática sin descentralización efectiva del poder; y que esta norma debe también aplicarse al Estado. El problema está en la forma de lograr este objetivo sin que simplemente se transfiera el poder que el Estado entrega a algún grupo que lo utiliza en su propio beneficio. En este sentido una real descentralización podría implicar acciones en la línea de presupuestos regionales y locales y la entrega a esos niveles de la responsabilidad de ciertas funciones de gran trascendencia social como educación, salud, vivienda, obras sanitarias y obras públicas, en la que el papel directo del Estado puede reducirse a fijación de normas y políticas generales. El mercado como mecanismo de asignación de recursos tiene, por cierto un importantísimo papel que jugar, pero una real democratización del poder requiere la existencia de mecanismos políticos como la consulta plebiscitaria y otros que contrarresten el mayor poder económico de algunos grupos sociales.

cia de ir rãp
téntica libert
de los trabajado
occidentales moda
imputársele ser fu

Tengo plena conciencia de que es necesario evitar los peligros del "populismo" y en general de las "sociedades blandas" en que se rehuye plantear los costos y sacrificios que implica el desarrollo, y entiendo también que una inflación elevada es incompatible con un crecimiento económico sostenido. Sin embargo, el problema de los sacrificios envuelve una decisión acerca de su distribución entre los grupos sociales y todo programa de estabilización implica también cierta distribución de los "costos" correspondientes. Pienso que estas materias pueden resolverse de mejor manera por la vía de esquemas que se orienten en la línea de los pactos o contratos sociales, lo que a su vez requiere la existencia de actores con un mínimo de autonomía y cierta equivalencia de poder real. Sólo así puede el Estado cumplir con su responsabilidad de modificar las tendencias históricas y conseguir que el devenir futuro favorezca en mayor medida a los más débiles y necesitados.

Los sectores empresariales tienen por definición un importante grado de poder en una economía de mercado caracterizada por una estructura productiva oligopólica y gozan de indiscutible ventaja en el acceso a los centros de decisión. Es, por tanto, indispensable que también lo posean los trabajadores, lo que está estrechamente relacionado con el funcionamiento de la organización sindical.

Obviamente es, asimismo tarea del Estado promover la organización de otros grupos sociales postergados, pues podrán contribuir activamente a la instauración de políticas destinadas a favorecerlos sólo en la medida en que tengan fuerza para participar, constituyéndose en apoyo del Gobierno y en actores progresivamente más activos de su propio destino.

La necesidad de conciliar un crecimiento económico sostenido con una mejor distribución del ingreso y un máximo de oportunidades de empleo se pone dramáticamente de relieve si se considera el caso de la agricultura. Es, sin duda, difícil el porvenir que espera a los campesinos favorecidos por la Reforma ~~agraria en general, y en particular~~

al crédito y de capacidad de gestión. Sin programas masivos de educación acelerada, capacitación y asistencia técnica en los problemas claves estos "nuevos empresarios" estafan condenados a vegetar o a abandonar, en definitiva, su actividad productora independiente, con la consiguiente concentración de la propiedad y futura inestabilidad social. La "igualdad ante el mercado" como expresión concreta del principio de igualdad de oportunidades sólo puede conseguirse por vía de un apoyo sostenido del Estado. Si esto no se produce habrá quizás un aumento inicial de producción, a costa de frustrar las expectativas de mejor distribución del ingreso y paz social en el campo, con el agravante que se producirá probablemente una acelerada tecnificación del agro con la consiguiente aceleración en el desplazamiento de mano de obra.

Razonamientos similares pueden aplicarse a la pequeña minería, la artesanía y pequeña industria y otras actividades de pequeña escala, en que el aumento de productividad por vía de una mayor capacidad para absorber tecnología, del acceso al mercado financiero y del conocimiento y práctica de modernas técnicas de administración requiere la realización de programas ambiciosos de promoción estatal. De ahí que sea motivo de preocupación el debilitamiento de CORFO, ENAMI, Servicio de Cooperación Técnica, INDAP y demás organismos públicos de fomento en tanto que se promueve la formación de un Banco Privado del fomento que por sus características y por el hecho de que será inevitablemente controlado por algún grupo económico con intereses estrechamente definidos, no atenderá esta clientela "más subdesarrollada".

En síntesis, las tendencias anotadas conducirán, a mi modo de ver, a una progresiva concentración de la propiedad de la empresa y a la consiguiente acentuación de las desigualdades existentes.

En relación a esta materia, creo asimismo, que es indispensable crear condiciones y mecanismos que permitan generar un mayor número de empresas más amplias de la po-

De todo lo anterior se deduce que cualquier reducción del ámbito de actividades estatales y del número de funcionarios públicos tiene que plantearse en forma muy selectiva de modo de resguardar la capacidad del Estado de ser realmente el conductor de la política de desarrollo socioeconómico, lo que implica además realizar un esfuerzo serio para retener cuadros humanos de la más alta competencia, posibilidad contra la que conspira tanto el creciente desnivel entre las remuneraciones que se ofrecen en el sector público y el sector privado, como la pérdida de status social que se deriva del sistemático desprestigio de la función pública.

En otro orden de ideas no puedo dejar de señalar mi preocupación por la orientación que parece prevalecer en materia educativa en que se está abandonando el concepto de la educación continuada y de una red educativa interconectada con múltiples puntos de ingresos y salida del sistema que permite compatibilizar las necesidades de mano de obra de diferentes niveles de calificación con una mayor oportunidad educativa para los trabajadores y en general para quienes han debido abandonar sus estudios prematuramente por razones económicas.

Me inquieta asimismo el limitado papel asignado hasta ahora a las Universidades dirigidas por personal militar en razón de las exigencias del estado de guerra interno, y de las necesidades de "depuración" y "restablecimiento de autoridad" lo que mantiene situaciones de incertidumbre e inseguridad que en nada favorecen el desarrollo académico real de tan trascendentales instituciones. Al respecto sólo quisiera indicar que el desarrollo de la ciencia y su vinculación al progreso técnico es hoy un factor estratégico del desarrollo y que requiere para su satisfactorio desenvolvimiento una alta prioridad en la asignación de recursos y un ambiente de plena libertad académica. Es un hecho incontrovertible que, pese al regreso de cierto número de profesionales que por razones políticas se habían ido del país en años recientes, continúa la fuga de cerebros en todas las disciplinas a digna, equipamiento y efectiva libertad biológicas individuales

son requisitos indispensables para lograr resultados positivos en esta materia. Especial significación cobran estas observaciones en relación al cultivo de las ciencias humanas y sociales cuya "hibernación" resulta fatal para un país. Lo ocurrido en la Unión Soviética es un ejemplo dramático del efecto paralizante que tienen las restricciones a la libre creación, expresión y discusión de las ideas. Desde otro punto de vista la experiencia que está viviendo Portugal, con una eclosión espectacular de diversos matices de ideología marxista al cabo de más de 40 años de proscripción de la dictadura, constituye una lección que debiera hacer meditar a quienes creen que las ideologías pueden suprimirse a la fuerza. La extraordinaria victoria conseguida hace pocos días por la oposición oficial en las elecciones parlamentarias celebradas en Brasil, apuntan además a que, aún en una sociedad relativamente poco politizada no es suficiente una espectacular tasa de crecimiento económico para mantener o generar una adhesión mayoritaria a un régimen determinado.

Por último no puedo terminar estas líneas sin una referencia explícita al tan controvertido tema de los derechos humanos, que está estrechamente ligado, quiérase o no a las apreciaciones que dentro o fuera del país se hacen respecto del régimen gobernante. En primer término quiero señalar que me parece evidente y natural que los órganos mundiales de publicidad que simpatizan o se identifican en mayor o menor medida con las posiciones de los partidos comunista y socialista lleven adelante una intensa campaña política en contra de la Junta Militar de Gobierno. Es obvio, también, que tales actividades han conducido a excesos inaceptables como diversas informaciones que se propalan por radio Moscú y otros medios de expresión. Sin embargo, creo que los chilenos tenemos el deber de hacer un esfuerzo por dejar de lado nuestras pasiones y juzgar este delicado problema en forma serena y objetiva y en función de la verdad de los hechos. Esta observación va dirigida, en primer término a los partidarios del régimen caído que desde una cómoda posición de exilio se dan el lujo de actuar y expresarse con una irresponsabilidad...

El deber de reflexión alcanza también, en igual medida a quienes expresan a diario su convicción de que en Chile reina la normalidad jurídica, sólo alterada por algunos excesos que las autoridades procuran reprimir y por el "justo castigo a los delincuentes responsables del régimen depuesto".

La búsqueda de la verdad obliga, dadas las evidentes restricciones que sufre la libertad de información interna, a acudir, en primer término, a fuentes internacionales responsables. En este sentido no puede dejar de llamar la atención que todas las comisiones de juristas que han visitado nuestro país han evacuado informes en que se deja constancia de que existen situaciones y han ocurrido reiteradamente hechos que no se avienen con el concepto de pleno respeto a los derechos humanos. Así por ejemplo, la Comisión Internacional de Derechos Humanos dependiente de la OEA, cuyos integrantes parecen dar adecuadas garantías al Gobierno de Chile y no han sido cuestionados por sus autoridades evacuó un informe en el que recomienda: "arbitrar los medios necesarios para que las familias de las personas privadas de su libertad sean notificadas de inmediato acerca de las causas y lugar de detención, modificar el régimen de detención de los menores de uno y otro sexo que hoy se encuentran privados de libertad en establecimientos destinados a adultos, extremar las medidas destinadas a evitar que se apliquen apremios físicos o psicológicos a los detenidos, establecer un razonable límite de duración a las privaciones de libertad, tomar las disposiciones del caso para que las detenciones o traslados no importen por sí mismas verdaderas sanciones como las incomunicaciones injustificadas o prolongadas, permitir a los abogados la libre comunicación con las personas detenidas, establecer que, bajo toda circunstancia el recurso de amparo obliga a la autoridad administrativa a cumplir la orden judicial de presentar ante el Tribunal competente a la persona afectada, y por fin, a adoptar una norma que, resultando imperativa para todas las autoridades del Estado, impida aplicar las disposiciones dictadas para estado de guerra a hechos ocurridos con anterioridad al 11 de Septiembre de 1973".

Resulta obvio que no se formularían ^{tales} recomendaciones si no se hubieran constatado hechos que las hacían necesarias,. Por lo demás muchas de ellas coinciden con situaciones concretas que hemos conocido.

Los antecedentes señalados contribuyen también a explicar las votaciones tan abrumadoramente adversas que se han ido produciendo en diversos foros internacionales lo que culminó con los recientes acuerdos de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La votación adversa proviene no sólo de los países socialistas o de los que se sitúan en alguna forma en su órbita política, sino incluye a la mayoría de las naciones democráticas occidentales, ya sea por el voto directo en contra o la abstención. El respaldo positivo al Gobierno de Chile se concentra en añejas dictaduras como Paraguay y Nicaragua.

La verdad objetiva de la situación es que como producto del estado de guerra y de su heredero legal el actual estado de sitio para preservar la seguridad interna, se han estado produciendo hechos del tipo de los que la Comisión de OEA recomienda evitar. La autoridad militar ha estimado necesario actuar con extrema dureza de acuerdo a su apreciación de la situación que ha vivido el país. La acción de la autoridad ha ido incluyendo en su política al respecto el castigo e incluso la expulsión del país de ciudadanos que han manifestado desacuerdo en relación a estas materias, incluyendo entre ellos a destacados personeros demócratas que ninguna relación tuvieron con el Gobierno de la Unidad Popular.

La concentración de la autoridad total en manos del Poder Ejecutivo, ha culminado recientemente con la dictación del D.L. 788 ~~que coloca definitivamente bajo su dependencia al Poder Judicial.~~ En efecto, cualquier norma jurídica puede ser modificada por vía de una Reforma Constitucional, lo que el artículo 1° de dicho D.L. hace *retroactivamente*, y que de acuerdo al artículo 3° se podrá continuar haciendo cada vez que ~~de manera explícita se señale que la Junta de Gobierno dicta la norma pertinente en el "ejercicio de la potestad constitucional que le corresponde".~~

Esta situación responde a lo que universalmente se define como una dictadura. Entiendo que al decirlo corro el riesgo de que se me aplique una medida punitiva, pero mi conciencia me obliga a ser honesto. No me anima ninguna intención de denuncia, pues lo que se expresa es tan sólo mi angustia ante estos hechos con que estoy en desacuerdo y que creo están dañando gravemente las reales posibilidades de reconciliación nacional. Creo, además, que como lo señalaba al comienzo de esta carta, tengo autoridad y pleno derecho para disentir sin que se me atribuyan intenciones torcidas.

Pese a todos los problemas enunciados en estas líneas espero y confío en que una progresiva maduración de criterios conducirá pronto a las rectificaciones necesarias. Chile tiene inmensas reservas morales y una tradición de convivencia democrática y de búsqueda de soluciones de paz y armonía de la que han sido actores y partícipes a través de nuestra historia tanto la sociedad civil como las Fuerzas Armadas. Estoy cierto que tan hermosa tradición finalmente prevalecerá, y que se podrá reconstruir una sociedad progresista y eficiente en el marco de la democracia con la participación conjunta de los institutos militares y de la civilidad.

En lo que a mí respecta, en un instante en que una honrosa invitación de la Universidad de California me hará ausentarme de Chile por unos meses, sólo he querido señalar algunos de los problemas, peligros y tareas que enfrentamos en la hora presente, tal como yo los veo. He expuesto mis puntos de vista con honestidad y espíritu constructivo, en la certidumbre de que no será jamás patriótico el silencio hipócrita o temeroso.